



▶ Título:
El Capital Social: Nueva visión del desarrollo

Autor:
José Ignacio Moreno León

El Capital Social: Nueva visión del desarrollo

El Capital Social ha surgido como propuesta alternativa a las fracasadas ideas economicistas que se han aplicado en América Latina en las últimas tres décadas, en la búsqueda de soluciones al subdesarrollo regional y a la crisis de marginalidad y pobreza que aqueja a la mayoría de esos pueblos. Por ello ya están empezando a incorporarse los valores del paradigma de Capital Social en la promoción de políticas públicas para combatir la pobreza y lograr elevar la calidad de vida en los países de la región, en el entendido de que valores tales como la confianza interpersonal, la asociatividad, la conciencia cívica, la solidaridad, la ética y los valores autóctonos de una sociedad deben tomarse en cuenta en dichas políticas para impulsar el desarrollo autosostenido y equitativo.



Podríamos afirmar que este novedoso enfoque humanista, en parte se refleja en la tesis, planteada por Luis Alberto Machado, de que los pobres son pobres porque no han aprendido a dejar de serlo; por lo que en la lucha contra la pobreza y la exclusión social, los pobres no deben ser vistos como parte del problema, sino que deben ser motivados con los valores del capital social para convertirlos en actores protagónicos en la búsqueda de la superación de la marginalidad y la pobreza.

En el paradigma de capital social esta visión se puede aplicar a toda la sociedad y diríamos que una sociedad es subdesarrollada porque no ha aprendido a dejar de serlo. Por tanto es imperativo el cambio de esa cultura del subdesarrollo por la cultura con un elevado activo de capital social para lograr superar el retraso económico y la marginalidad.

Planteamos en esta obra que el sistema educativo latinoamericano, a todos sus niveles, pero en especial la educación superior y las universidades como cúpula de este sector, deben emprender transfor-

maciones fundamentales, tanto en contenido, como en estrategias de enseñanza aprendizaje para impulsar, con sentido protagónico, el cambio cultural que la región requiere a fin de superar su estancamiento y enfrentar las nuevas realidades globales, minimizando los riesgos y aprovechando las oportunidades de este nuevo escenario planetario. Se requiere que las universidades asuman un pacto social e incorporen la pedagogía de los valores para fomentar la cultura ciudadana, los valores éticos y morales y la solidaridad; al igual que los valores autóctonos, para que quienes egresen de sus aulas sean líderes de este esfuerzo de cambio cultural. Es decir, la nueva educación debe incrementar el empeño para acrecentar en la región el capital humano, la capacidad humana y el capital social, como los recursos básicos para lograr el crecimiento compartido y sostenido que América Latina requiere a fin de superar la pobreza y el estancamiento.

En el análisis que hacemos de la crisis nacional, planteamos que la misma no se puede evaluar con un enfoque estático o cortoplacista, ya que esta visión de miopía política no nos permitirá superar los graves problemas que vive el país y puede hacernos volver a cometer los mismos errores del pasado.

Se trata de una crisis estructural, que, en parte es reflejo de los mismos problemas que confrontan otros países de América Latina y el mundo en desarrollo frente a la globalización, pero que en nuestro caso específico se ha agravado como consecuencia del deterioro, durante casi tres décadas continuas, del modelo rentista de desarrollo que ha tenido el país y que se ha sustentado en flujos espasmódicos de ingresos petroleros, administrados con graves ineficiencias y poca transparencia por los gobiernos con la complicidad de la mayoría de la dirigencia nacional, y que han exacerbado como secuela perversa, la cultura del paternalismo estatal, el

clientelismo político y la pérdida de valores, con la grave presencia del cáncer de la corrupción, del deterioro institucional y del obscuro crecimiento de la exclusión social, del desempleo, la pobreza y la marginalidad.

Lo cual nos presenta un drama donde los pobres se pudren hacinados en prisiones, en espera de una justicia que nunca llega y los que más tienen deben encarcelarse en sus mansiones, con murallas y alambradas para protegerse del hampa desbordada, producto de un sistema económico ineficiente y excluyente que debe erradicarse con urgencia para que no explote el caos social.

Ante esta inmoral realidad y la coyuntura política que estamos viviendo, tenemos que entender que no se trata sólo de superar un proceso revocatorio con el triunfo de un Sí o un No; o de los ejercicios electorales que deben realizarse a corto y mediano plazo.

La crisis tiene raíces muy profundas y alcances estructurales.

Se trata de tomar conciencia de que no podremos superar nuestras miserias, mientras no rompamos con la cultura del rentismo petrolero que ha engendrado un Estado entrabador e ineficiente y una sociedad con mentalidad clientelar y pobreza de valores. Mientras no entendamos que no es ético construir riqueza para pocos generando miseria para muchos. Mientras sea común la justicia venal y las instituciones secuestradas; el político demagogo y los gobernantes que, en lugar de gobernar para la gente, lo hagan para su ego y su bolsillo. Mientras en las estadísticas de Latinobarómetro y Transparencia Internacional, nuestro país se ubique en el grupo de naciones con más pobres niveles de confianza interpersonal y un elevado índice de corrupción.

Mientras no nos deslastremos del autoritarismo mesiánico y el populismo irresponsable que en Venezuela han sido perversas formas de gobernar y hacer política; y, finalmente, mientras prevalezcan en nuestra sociedad, lo que algunos estudiosos han llamado el individualismo anárquico, ese personaje egoísta, sordo a sus responsabilidades cívicas y a la práctica de la solidaridad, apático e irresponsable que no tiene reparos en emplear el tráfico de influencias, el soborno y el chantaje para burlar normas y lograr beneficios personales. Que escuda sus deberes cívicos echándole la culpa de los males nacionales sólo a los partidos políticos y a los gobiernos de turno y evade las responsabilidades propias, en la búsqueda de pretendidos salvadores mesiánicos. Que no entienden que en democracia todos somos actores y no podemos dejar de serlo, si queremos preservar la libertad y la política como el ejercicio responsable de la gobernabilidad democrática.

En síntesis, no podremos deslastrarnos del subdesarrollo mientras la sociedad venezolana no supere el profundo déficit de capital social cognitivo que se expresa en la cultura rentista y sus nefastas secuelas y del capital social estructural que explica la fragilidad de nuestras instituciones y el pobre desempeño de nuestra democracia.

Por ello, ante el reto de los nuevos tiempos y la necesidad de los cambios profundos que reclama el país, se requiere un gran acuerdo nacional para asegurar la gobernabilidad democrática y el desarrollo incluyente. Para emprender la lucha contra la pobreza y la exclusión como un imperativo político y un mandato ético; y para concertarnos todos en la definición y realización de una nueva visión de país, fundamentada en el rescate de los valores y en la conquista del desarrollo político, institucional y tecnológico.

Se trata de un Acuerdo Nacional de Gobernabilidad y Desarrollo Incluyente que debe servir de plataforma para lograr, con optimismo, con una visión constructiva y superando las diatribas de la mediocridad política, las profundas transformaciones que Venezuela requiere y despejar el camino hacia un país deslastrado del rentismo, abierto, competitivo y solidario, con una economía productiva y generadora de empleos estables y bien remunerados, no excluyente y en un franco proceso de diversificación que debe apalancarse en el uso inteligente del petróleo, con un sensible incremento del valor agregado interno y clara conciencia de la temporalidad de este recurso, debido a las crecientes presiones ambientalistas y a los avances científicos y tecnológicos que seguramente se profundizarán en las próximas décadas en el ámbito de la energía y la eco-economía.

Una Venezuela que haya logrado acrecentar su activo de capital social, mediante una profunda transformación de la educación que debe empeñarse en la enseñanza de los valores y en la formación, desde la niñez, de ciudadanos solidarios, con cultura cívica, emprendedores y con marcado compromiso con el país. Con un Estado Moderno, descentralizado, transparente y eficiente en su gestión, promotor y facilitador del desarrollo y que haya fortalecido sus instituciones como garantes de la libertad, del bienestar social y de la verdadera democracia participativa.

Una Venezuela donde exista igualdad de oportunidades para todos, prosperidad, libertad y justicia para todos. Una Venezuela capaz de incorporarse con ventajas en la sociedad global del tercer milenio. Es decir, no una Venezuela de la cuarta, ni mucho menos de la quinta... sino una Venezuela de Primera.